

Las cifras de la seguridad

Diciembre, mes de cortes de cuentas, lo fue también para la política bandera de este gobierno, la seguridad democrática. El Ministro de Defensa presentó el jueves pasado un balance en este campo que no solo abarca el año 2004, sino 850 de los 1.460 días que lleva el presidente Álvaro Uribe en el cargo. Hay grandes avances. Y algunos lunares.

Según las cifras oficiales, los resultados, a todas luces, son impactantes. Aunque algo más de dos colombianos siguen siendo asesinados cada hora y una persona es secuestrada cada seis horas (hubo 20.012 homicidios y 1.441 secuestros en el año), Colombia no veía tasas tan bajas de homicidios desde hace 17 años y de secuestros desde 1997. Hubo solo un ataque de la guerrilla a una población. Salvo los asesinatos de alcaldes y ex alcaldes, que pasaron de 8 a 14 entre el 2003 y el 2004, y los de maestros, que con 57 muertos aumentaron su trágica cuota en casi 40 por ciento, la violencia homicida contra indígenas, sindicalistas y concejales ha disminuido drásticamente, según corte de cuentas a noviembre del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia.

El número de acciones de sabotaje fue el más bajo en cuatro años. Entre el 2003 y el 2004 se redujeron en casi 60 por ciento en promedio los atentados contra torres de energía y comunicaciones, oleoductos y puentes; los paros armados de la guerrilla pasaron de 27 a 9 y hubo 85 retenes ilegales menos. La Policía Nacional también se felicita: hubo casi 31.000 incidentes menos en los doce llamados 'delitos de impacto'. La seguridad en las carreteras ha mejorado tanto que para este año se considera promover 'rutas seguras', pues la gente ya no solo viaja en caravanas sino por su cuenta.

Grandes avances, sin duda. Que significan miles de vidas salvadas y están en la base de la popularidad de este gobierno y el ánimo de confianza que ha generado.

* * * *

A la vez, las cifras deben ponerse en contexto. La reducción de homicidios viene de tiempo atrás en Medellín y en Bogotá, en buena parte gracias a políticas locales. Aunque este Gobierno ha dado un ritmo sin precedentes a la disminución de los secuestros (en el 2004 hubo menos de la mitad que en el 2002), la tendencia a la baja viene del 2001. La menor cantidad de masacres y sus víctimas se atribuyen al cese de hostilidades parcialmente cumplido por los paramilitares; en realidad, estas vienen disminuyendo de manera sostenida desde el año 2000.

Las cifras son desiguales a nivel regional. El secuestro aumentó en Vaupés y Atlántico. El homicidio lo hizo en Cali, en Valle, Cauca, Casanare, Chocó, La Guajira, Vichada, San Andrés, Risaralda, Caquetá y Putumayo. Y, en todos los casos, siguen siendo muy altas. Por ejemplo, según la Fundación Seguridad y Democracia, aunque los retenes ilegales son hoy la mitad de los del 2002, hubo de todas maneras uno cada dos días, y cinco actos de piratería terrestre. A pesar de que la seguridad urbana ha mejorado en casi todos los campos, el 67 por ciento de los homicidios sigue cometiéndose en las ciudades. Y poblaciones enteras siguen confinadas, asediadas o desplazadas por la guerra abierta en el campo.

La de desplazamiento es una de las cifras más disputadas. Mientras la oficial Red de Solidaridad Social dio cuenta de 124.000 desplazados en el 2004 (a noviembre, 40 por ciento menos que en el 2003), la ONG Codhes, que hace un monitoreo independiente, los calculó en 205.000 (solo hasta septiembre). Escandalosa diferencia que no se presentaba desde el 2000 y que es imperioso aclarar, pues se refiere a la principal calamidad humanitaria del país.

Hay cifras sorprendentes, como el anuncio de que más de 13.500 miembros de los grupos armados ilegales fueron capturados o muertos en el año. Si se agregan las cifras para el periodo presidencial, en estos 850 días de gobierno habrían sido capturados, muertos o desmovilizados individual y colectivamente 15.300 paramilitares y 24.035 guerrilleros. Número

insólito, que casi supera al total de efectivos de las Auc, las Farc y el Eln. O bien, casi todos los capturados (cerca de 24.000) han sido puestos en libertad –y, por tanto, deberían revisarse los mecanismos de captura o de investigación posterior, pues algo grave falla en esas áreas–, o la capacidad de reclutamiento de estos grupos supera con creces la efectividad del Gobierno para reducirlos –lo cual debería generar con urgencia estrategias para prevenir el reclutamiento, hoy inexistentes–. Poco riguroso y, en un Estado de Derecho, inaceptable catalogar a esos capturados que

quedan libres como 'integrantes' de los grupos armados.

Pero no todos quedan libres. Pese a que este Gobierno apenas pasó de la mitad de su periodo, se ha puesto en las 139 cárceles del país a más de 16.000 personas, casi el doble de las encarceladas en el gobierno anterior y más que en cualquier otro desde 1990, según datos de la Defensoría y el Inpec. A mediados de año, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo estar siguiendo 8.000 casos de detenciones relacionadas con el conflicto. El Ministerio de Defensa da cuenta de 68.000 capturas por narcotráfico (por Ley 30 de 1986) solo en el 2004, número igual al total de la población carcelaria. Otra cifra asombrosa. Que lleva a pensar qué tanto se está capturando sin las debidas pruebas, en redadas masivas o con base en la 'inteligencia' de los más de 3 millones de informantes que dice haber reclutado el Gobierno.

* * * *

Una de las áreas en que más ha avanzado esta Administración es la del aumento del pie de fuerza. Para fines del 2005 habrá siete batallones de alta montaña (en agosto del 2002 había solo uno) y casi el doble de escuadrones de carabineros que al iniciar el gobierno. Más de 27.000 soldados campesinos habrán llegado a 754 municipios y el pie de fuerza total habrá aumentado en 95.000 hombres, para alcanzar más de 374.000. Refuerzo en buena parte responsable de la mejora en las cifras de seguridad.

Pero que, como los mismos militares en el terreno lo reconocen, demanda el complemento de estrategias tendientes a llevar otras instituciones del Estado a las regiones donde arrecia el conflicto y medidas para integrarlas a los circuitos económicos. Eso es lo único que puede impedir que la mejora en la seguridad sea flor de un día. Por ello, no basta con felicitarse por las buenas cifras. Hacerlas sostenibles es el gran reto que enfrenta este Gobierno.

editorial@eltiempo.com.co